Peritaje 7
Caso nasa
Formas de sanción y conflicto de competencias jurisdiccionales
20 de enero de 2020

Contenido

Presentación
Metodología
I. Fundamentos
Feliciano Valencia es un indígena nasa
II. La comprensión de la jurisdicción especial nasa
Formalidades externas
III. Dificultades para caracterizar el derecho propio del pueblo nasa
La integridad de la jurisdicción especial
IV. Observaciones a las decisiones de las autoridades indígenas
El territorio y la pertenencia étnica de las partes en la delimitación de la *notio*
La conciencia étnica como factor que determina la jurisdicción
V. Valoración de las decisiones de las autoridades
A manera de conclusiones
Anexo 1. Hoja de vida
Anexo 2. Preguntas orientadoras
Anexo 3. Memoria fotográfica
Bibliografía

Presentación

En materia de pluriculturalismo y, específicamente, en el ámbito de las jurisdicciones constitucionales, la Corte Constitucional ha tenido que enfrentar desafíos sorprendentes pero estimulantes, apelando a herramientas conceptuales que los juristas distamos mucho de manejar con destreza por ser propias de las ciencias sociales empíricas, como la antropología, que hacen patente la necesidad de una cooperación interdisciplinaria mutuamente enriquecedora.

Carlos Gaviria Díaz

En este documento se encuentra un peritaje en antropología jurídica. Busca responder a la solicitud del indígena, Señor Feliciano Valencia Medina, que solicita un intérprete cultural para hacerse comprender de mejor manera haciendo uso del artículo 12 del Convenio 169 de la OIT.

> Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

El propósito es ampliar información que se considere pertinente para resolver, mediante un fallo, el conflicto cultural y normativo que se ha presentado respecto de la revisión de su caso. De manera especial busca aportar a la construcción de entendimiento intercultural en el marco de un pluralismo jurídico de tipo igualitario que define principios y reglas de interacción, entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena.

El pluralismo jurídico igualitario: *1)* promueve la valoración y protección efectiva de la integridad étnica y cultural de cada pueblo en su condición de sujeto colectivo de derecho distinto; *2)* activa las justificaciones para dar un trato diferenciado, mediante otros principios y otros procedimientos, a individuos y pueblos indígenas culturalmente distintos; *3)* revela, a servidores públicos, jueces, magistrados y defensores, los patrones culturales expresos en los órdenes legales indígenas (derechos propios), y por lo tanto existentes en las estructuras cognitivas que se deben conocer para poder reconocerlos y valorarlos, a fin de no violar los derechos humanos a la distintividad y a lo propio de estos pueblos; *4)* controvierte visiones liberales y universales de los derechos humanos en relativos, cuando quebrantan los derechos particulares de los pueblos indígenas, con excepción de los mínimos jurídicos. De allí la importancia de incumplir, en contextos culturales determinados, estándares internacionales homogéneos de protección porque su contenido o forma de implementación afecta el derecho humano de estos pueblos a conservar su diferencia; *5)* incluye en la agenda del poder judicial (y administrativo) temas ausentes, que contribuyen a dar paso a un nuevo derecho porque permite incorporar temas relacionados con los derechos humanos de estos pueblos.

El peritaje antropológico es una aplicación de la antropología jurídica que, es un campo especializado de la antropología cultural, o sea la rama de esta ciencia social dedicada a estudiar la interpretación de la cultura humana, es decir, todo lo que el hombre aprende como miembro de una sociedad: los conocimientos y convenciones, así como las expectativas que comparten los integrantes de un grupo y que transmiten a sus hijos. La cultura se visibiliza en sociedades particulares; esto es, en los modos de vida específicos que los distinguen de otros grupos de modo real, o bajo el sentimiento de un sentido de especificidad como distintos, pese a que también puedan compartir rasgos culturales con otras sociedades. Los miembros de cada una de las culturas conllevan, no sólo hábitos, valores, ideas, palabras y gestos característicos para comunicarse, sino que, además ordenan y clasifican de modo peculiar elementos materiales e inmateriales, como las diferentes creencias. Una cultura no es

estática; es el resultado de lo propio, de lo apropiado de otras sociedades, e incluso, de elementos que le han sido impuestos.

El objetivo específico de estudio del peritaje antropológico es indagar el orden jurídico en una sociedad, como variable de la cultura. Busca encontrar, en casos concretos «señales específicas» sobre cómo se regula la vida de la gente, y las explicaciones que revelen por qué ese orden es como es; por qué mecanismos funciona, qué aspectos presentan conflictos internamente o frente a otras sociedades, cuál es su lógica y qué instituciones sostienen los principios y procedimientos reguladores.

El peritaje antropológico busca interpretar los elementos de la diversidad cultural que correspondan, efectivamente, con lo que se evidencia de los referentes cognitivos de una sociedad particular; señala las motivaciones que conducen a ciertos comportamientos, lo que permite interpretar hechos bajo un marco específico. Aborda relaciones sociales lógicas esenciales para configurar criterios más comprensibles sobre la diversidad expresada en una sociedad particular.

Cuando se busca encontrar qué es el derecho en una sociedad y cómo se expresa este derecho en un campo determinado, se tiene que investigar también por qué la gente hace lo que hace, ya que lo jurídico suele ser un croquis mental que señala comportamientos que se deben seguir, que mueven a las personas para el deber ser y para el cumplimiento de los deberes y de los derechos.

En este documento se desarrollan argumentos con el objeto de contribuir a la toma de decisiones de los honorables magistrados que conocen el caso del senador Feliciano Valencia.

Metodología

Para la elaboración de esta prueba se realizaron las siguientes actividades:

1. Lectura del caso a partir del expediente.

2. Preparación de instrumentos para trabajo de campo con autoridades y comunitarios del Resguardo Munchique Los Tigres de Santander de Quilichao. (Ver anexo 2).

3. Trabajo de campo realizado durante los días 6 y el 7 de noviembre con el fin de obtener información que contribuye a conocer y comprender aspectos culturales propios del pueblo nasa relacionado con el derecho propio, en particular sobre la organización social (parentesco derechos y deberes) y ejercicio de la justicia. Se entrevistaron a las siguientes personas del Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres: Algemiro Pillimue, Belarmino Pillimue, Lucila Collazos, Rodrigo Chilo, Jairo Díaz, Hernán Dicue y, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Piedad Dicue, Olga Lucía Pazú, Luz Marina Trochez, Lucio Julicue. Cada uno de ellos ofreció comentarios relacionados con el caso y respondieron a preguntas de la antropóloga.
El 7 se hizo presente el senador Feliciano Valencia. Toda la ritualidad para comenzar el día relacionado con el saludo, el agua, el fuego y las piedras, orientado al agradecimiento y refrescamiento, las observó el senador lo que evidenció el comportamiento esperado. Como antropóloga presente el día 6, me indicaron el comportamiento a seguir, el cual viví los dos días con mucho respeto. (Ver anexo 3).

4. Estudio de jurisprudencia y bibliográfico sobre los temas solicitados.

5. Elaboración del informe.

I. Fundamentos

El reconocimiento en Colombia de un pluralismo jurídico, legal y oficial representa el afán de adaptar el derecho estatal a la realidad social, es decir, valorar los pueblos y comunidades diversamente distintos existentes y portadores de principios y procedimientos para ordenar la vida social. En razón al reconocimiento de esta diversidad y adoptando el pluralismo normativo, la Constitución Política de Colombia de 1991, ha consagrado nuevas autoridades para administrar justicia en sus territorios. La aceptación constitucional de la autonomía judicial indígena tiene como fin dotar a estos pueblos de las condiciones legales y de oficialidad necesarias para la protección efectiva de sus derechos fundamentales como sujetos colectivos de derecho a propósito de que puedan manifestar la identidad cultural, tanto en sus propios territorios como a lo largo y ancho del panorama nacional.

Precisamente cuando hablábamos de la cultura, de usos y costumbres, buena parte de los derechos de los pueblos indígenas tienen manifestaciones importantes que los diferencian de otros sistemas. Por ejemplo, para el pueblo nasa: el sujeto que se enferma tiene que ver con la condición de transgresión. El médico tradicional /The ´jsa the´wala/ es el especialista que contribuye a prevenir, a sanar /We´wnxi / y también para que el enfermo pueda estar bien aconsejado / *Yu´tkpejñxi*/. Como autoridad espiritual tiene el don de sanar, armonizar y equilibrar, las señales o situaciones de transgresión a las normas propias. Por ello, se considera a una persona que ha transgredido la norma, está enferma, es decir se ha desviado o sea que se salió del camino trazado por los mayores. Son sociedades cara a cara, en la que el reconocimiento del otro es fundamental, pues lleva a observar de manera cercana. Por otro lado, hace relación a un proceso de socialización para transmitir pautas de comportamiento en beneficio de una colectividad, porque el sujeto colectivo tiene un peso específico muy grande. No están dentro de lo establecido esos análisis para el derecho estatal.

El Derecho Propio del pueblo nasa está sustentado en la normativa espiritual, que de ser transgredido acarrea la aplicación del remedio (sanción), está ligado a un sistema de control social muy fuerte para que el sujeto se armonice; «se controle y no transgrede, la norma natural»; «lo controlamos para que no se enferme ni se proceda a aplicar remedio»; y, esos elementos de control social son ajustados al derecho propio que no necesariamente son reconocidos por extensión del derecho positivo estatal, pero sí existen y son valorados por la Constitución de 1991.

Las normas que obligan y con estas la capacidad de un pueblo de optar decisiones judiciales para ser ejecutadas internamente aplicando los remedios propios o externamente. Esta última, enviándolo a la cárcel, como forma de salvaguardar la integridad del victimario y de la víctima, ya que la comunidad se encuentra bastante molesta y cargada de energías negativas. La decisión que se toma siempre va orientada a la pervivencia de la comunidad; es decir según favorezca al pueblo y con el objeto de seguir teniendo una existencia cultural alterna, así como mayor autonomía.

La adopción de la nueva Constitución Política de Colombia que consagra el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación no es una declaración retórica, sino que constituye una proyección en el plano jurídico del carácter democrático, participativo y pluralista de la República y obedece a la «aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferente de los de la cultura occidental».

La sociedad colombiana contemporánea está constituida de manera objetiva por una confluencia de fragmentos socioculturales, que reiteran la necesidad de una noción pluralista de las diversas concepciones culturales de naturaleza humana, para estar en sociedad. Bajo estos presupuestos, la Constitución Política permite al individuo definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en valores étnico-culturales concretos, como es el caso del senador nasa Feliciano Valencia vivir su

identidad con base en sus diferencias específicas, en lo relativo a los valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general de ciudadanía como el definido por los estados liberales unitarios y monoculturales. El individuo es concebido, entonces, como portador de características específicas, como ser único y singular, con capacidad para hacer efectivo su proyecto de vida, con lo que, paralelamente, queda autorizado para reivindicar su propia conciencia ética.

Así mismo, en desarrollo de los principios constitucionales, la Corte Constitucional ha considerado que las comunidades indígenas como tales, son sujeto de derecho colectivo y por ende de derechos fundamentales y no meras realidades fácticas y legales. En efecto, la singularidad propia de estas comunidades, en las cuales se reproducen y se manifiestan formas de vida social, es el presupuesto básico del reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural. Dichas formas de vida social son asimiladas como vivencias colectivas y no se encuentran mediadas por los miembros individuales del grupo, quienes, a su turno, no conciben una existencia separada de la comunidad.

Feliciano Valencia es un indígena nasa

Lo central en un pueblo indígena es una identidad relacionada con la historia marcada por ser los primitivos, los descendientes de los primeros de América y, por un sentimiento que los une a una colectividad de la que se saben parte. Ese sentimiento es subjetivo y es uno de los dos elementos definidos por el Convenio 169 de la OIT, para marcar identidad.

> Art. 2. **La conciencia de su identidad** indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

La identidad étnica y cultural no equivale, como erróneamente se piensa, a la sumatoria de fenómenos como una lengua propia, un tipo de vestido, pintura facial, los materiales naturales de la vivienda o la ubicación distante de una cabecera municipal para citar algunos elementos. Muchos fenómenos han desaparecido en algunos pueblos por el proceso civilizatorio, encargado por el Estado Monocultural

> *Feliciano Valencia se autoidentifica como nasa; es reconocido por sus autoridades y por los comunitarios como nasa. Habla la lengua de los nasa. Existe en él un sentido manifiesto de identidad y autorreconocimiento, que lo marca con relación a otros no indígenas.*

La condición de identidad indígena de este hombre no puede ser tampoco, el conjunto de fenómenos relacionados con base en una visión evolucionista, según la cual, a mayor asimilación de rasgos culturales de otras sociedades, menor es la identidad o la cultura.

> *Feliciano Valencia, habla muy bien castellano, conoce algunas leyes nacionales por ejemplo la ley 21 del 91, y cómo funciona el Estado; sabe qué es la democracia, también conoce la historia de su pueblo con los líderes anteriores que son ejemplo para seguir y, cientos de referentes cognitivos propios de su cultura que lo marcan como sujeto con una identidad diferenciada.*

La singularidad propia de estas comunidades en las cuales se reproducen y se manifiestan formas diferentes de vida social, son los *sentimientos y las vivencias colectivas* que siempre son cambiantes y que se recrean con el tiempo, al no incurrir a estructuras petrificadas o a camisas de fuerza que no se modifican temporal, ni definitivamente. Esta es una de las visiones que actúa como presupuesto del reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural.

II. La comprensión de la jurisdicción especial nasa

El desarrollo de la política de reconocimiento y valoración de la existencia de sistemas de derecho propio de los diferentes pueblos indígenas rompe el modelo que prevalecía en Colombia y que consistía en negar sistemáticamente la posibilidad de un orden normativo plural. El cambio constitucional significa una ruptura trascendente del derecho estatal con respecto al pasado, destinado a regular hacia el futuro la aplicación coherente del reconocimiento de la diversidad. Este cambio cultural se refleja en la magnitud con la que, en pocos años, se han multiplicado los dispositivos legales e institucionales para *reconocer y valorar* estos derechos propios. No sólo las altas cortes han definido mediante jurisprudencia orientaciones edificantes y la valoración a esas otras sociedades, sino que se ha venido construyendo entendimiento intercultural e inter legalidades, que permiten hablar de un nuevo derecho en Colombia.

El derecho propio nasa, expresión del pluralismo jurídico, que regula la vida social, es diferenciable por las normas, procedimientos y autoridades, así como por el tipo de casos o situaciones que regula. Las normas diversamente distintas que ejercen, con manifestaciones de carácter social, estados relacionados con la salud y la enfermedad guían el comportamiento de sus miembros porque cumplen la función de restringir y reprimir las desviaciones. Estas normas deben estar garantizadas, y son consideradas jurídicas por la coacción que pueden realizar autoridades reconocidas para ello.

Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el derecho de auto disposición, para organizarse y gobernarse de acuerdo con su propia visión del mundo, sus tradiciones y sus deseos. Este derecho incluye, por lo tanto, el derecho a regirse por sus propias normas, con la posibilidad además tanto de crear normas como de aplicarlas.

Hay que preguntarse, en concreto, si las autoridades indígenas al momento de ejercer funciones jurisdiccionales, en este caso concreto del senador, podían o no aplicar normas y procedimientos propios frente al caso ocurrido en Popayán como efectivamente hicieron.

Formalidades externas

Para responder a esta pregunta: El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes dispone en los artículos relacionados con la protección estatal a los sistemas legales indígenas:

Artículo 8.1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

> *El derecho propio nasa define: autoridades específicas; procedimientos para conocer, juzgar y sancionar.*
>
> *Las autoridades indígenas del Resguardo Munchique Los Tigres de Santander de Quilichao, que juzgaron y sancionaron a Feliciano Valencia lo hicieron facultados por dos fuentes: formalidades normativas externas y por formalidades normativas internas que, a juicio del perito plasmaron plenamente en sus actuaciones.*

Artículo 8.2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que

sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

> *Las instituciones nasa propias para remediar, como el agua fría, el fuete, el cepo, han sido constitucionalizadas vía jurisprudencia.*

> *Los nasa eliminaban a los llamados brujos y definieron autónomamente para no vulnerar el derecho a la vida que, frente a estos casos que siguen manifestándose y haciendo daño, según sus creencias, habría de aplicarse diferente sanción por mandato constitucional expreso.*

Artículo 8.3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9.1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

> *La Corte Constitucional ha conocido, valorado y respetado los métodos nasa tradicionalmente utilizados para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.*

Artículo 9.2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en *cuenta* las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10.
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales
2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales reconociendo la autonomía de las comunidades en cuanto a su decisión de asumir el conocimiento de un caso. Cuando se radica en una persona o una institución una función, esa persona o institución está en la obligación de realizar las actividades relacionadas con la función. Cuando se trata de una función pública como es la de administrar justicia, un incumplimiento de la función tiene como consecuencia la negación de los derechos de los ciudadanos y, en el caso particular de la justicia. La consecuencia es nada menos que la violación del derecho al acceso a la justicia.

> *Feliciano Valencia tuvo acceso a la justicia propia. Sus autoridades y comunitarios conocieron el caso y aplicaron principios y procedimientos siguiendo el rastro de los mayores.*

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas es un derecho. De esta manera, al asumir el conocimiento de un caso y verificar su competencia, se procede a investigar y posteriormente a aplicar principios, normas y procedimientos vigentes en la comunidad indígena. Ante estas actuaciones judiciales, se debe constitucionalmente conferir igual valor a las decisiones de los jueces ordinarios (ordinarios aquí por oposición a indígenas).

El artículo 246 de la Constitución define que: «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales». Pero ¿quiénes son las autoridades? Quienes actúan según los principios y procedimientos predecibles, son pensados como personas capaces de ser imparciales, es decir, libres de prejuicios y de corrupción. Las normas que rigen las costumbres particulares están insertas en definiciones generales que permiten examinar los casos particulares a la luz de estas generalidades. Los hechos suelen juzgarse con arreglo a principios generales o a normas legales y de acuerdo con procedimientos peculiares establecidos, reconocibles en un contexto de sociedad particular, que suponen pruebas y argumentos, así como actuaciones garantizadas por normas legales encuadradas en un marco institucional, cuyo objetivo es llegar a un resultado que responda a las exigencias esperadas como razonables y definidas internamente.

La teoría clásica del derecho procesal coincide en señalar como elementos de la jurisdicción la *notio,* el *iudicium* y el *imperium* La *notio* se define como la facultad de conocer los asuntos que de acuerdo con las reglas de competencia corresponden a cada juez. Presupone la facultad de citar a las partes, recaudar pruebas, hacer notificaciones, etc. El *iudicium* es la facultad de resolver el asunto sometido a consideración del juez. El *imperium*, finalmente, consiste en la potestad de hacer efectivas las decisiones judiciales.

III. Dificultades para caracterizar el derecho propio del pueblo nasa

Existen aún después del cambio constitucional dificultades para entender esos derechos distintos. Una es la tendencia a «asemejar» los derechos propios al derecho estatal con base en equivalencias. Por ejemplo, dónde se halla la norma aplicable a X situación. Cuáles son las autoridades competentes. ¿Cómo puede ser la comunidad /nasa wala/ una instancia para conocer, juzgar y sancionar en esta sociedad particular? Cada derecho propio tiene diferencias y los casos son tratados de una manera singular en virtud de las costumbres de la comunidad, las consideraciones de bienestar social, los ideales de justicia y moralidad, los usos, y también la experiencia acumulada de una larga historia. Lo fundamental es la convicción que se tiene acerca de qué es lo más conveniente para la comunidad, definida sobre un concepto de bienestar que trae consigo convicciones y que configuran a la persona en su calidad de autoridad o de miembro de una determinada sociedad. Frente a la noción del *debido proceso*, la Corte Constitucional por ejemplo con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, definió que este debe ser interpretado en forma amplia, «ya que exigir la vigencia de normas e instituciones rigurosamente equivalentes a las nuestras permitiría una completa distorsión del pluralismo como principio básico de la Carta».

La integridad de la jurisdicción especial

Hay un rango de esferas de regulación para el derecho que cubre bienes materiales y espirituales, la definición de los hechos dañinos, así como lo que corresponde a las maneras de distinguir o elegir miembros de la comunidad para distintos cargos o servicios. En lo atinente a la familia, por ejemplo, campo regulado por el derecho propio, existen principios que regulan esta institución:

«Buen vivir en familia»; es raíz /Kwe´sx uijnxi/. No se puede crear alegría en medio de tragedias; el padre y la madre tienen deberes /Yu´thenxi puutx yu thegnxi; las uniones de pareja

deben durar, (Hoy se está perdiendo esa costumbre, hay fragmentación /Txutenxi/). La mujer es cuidadora del hijo, el hombre trabaja para conseguir lo necesario; es deber tener cariño a todos los hijos.

En la ST– 496/96 el M. P. Carlos Gaviria Díaz parte de un hecho, actuado por un individuo o por varios, que debe ser explicado a la luz de una cultura particular.

Aplicado al caso:

El cabildo del resguardo indígena de Munchique los Tigres, el día 14 de septiembre de 2017 prosiguió recibir el proceso por el presunto delito de violencia intrafamiliar accionada por la señora DIANA PERAFÁN en representación de su hijo JUAN CAMILO VALENCIA y, en contra del comunero FELICIANO VALENCIA MEDINA por los supuestos hechos.

El 25 de junio de 2011 Feliciano Valencia Medina «quien es el padre de mi hijo agredió de manera verbal a mi hijo a quien le dijo que él no era el padre, que él era un tropiezo y un encarte que le habían metido, que no tenía tiempo para él, pero si para su novia, que no lo jodiera y que no se metiera con él, que cambiaría el número del celular para que no lo llamara y terminó dicha agresión diciéndole que él era un hijueputa».

Querella interpuesta por Diana Socorro Perafán.

Es preciso destacar el campo de la cultura que ostenta un comportamiento inadecuado a causa de litigio.

Los nasa del Resguardo Munchique Los Tigres entrevistados, asientan el hecho en una problemática que tiene que ver con cuatro aspectos: primero con la comunidad; segundo con la familia; tercero con el niño y cuarto con la demandante. Consideran la situación como campo de su jurisdicción porque se trata de un miembro de su comunidad y de su hijo, que es pensado como nasa, pese a que la madre no lo considera así por no estar registrado; las partes involucradas presentan pruebas y argumentos razonados.

Con base en la información conocida se busca examinar si se transgredió un bien jurídico como el de la familia, el de la comunidad, el del niño que, acorde con su derecho propio debe protegerse con un sistema de prevención, armonización y en caso de transgresiones, remedio /yu´tchnxi/. No es solo por las actuaciones definidas como transgresoras frente a una persona, en este caso el niño, sino ante todo por no actuar frente a las obligaciones comunitarias esperadas como es portarse bien.

> *Aunque Feliciano Valencia Medina, nombrado por la UNESCO como «Maestro de la sabiduría», «Consejero indígena», por tanto es un miembro distinguido por sus actuaciones reiteradas frente a su comunidad, comportándose como miembro de la misma y contribuyendo a su existencia cultural alterna, defendiéndose como ente cultural, es un sujeto que puede enfermar y bajo este estado actuó con ira propinando palabras soeces a su hijo, en presencia de la madre, quien fuera compañera ocasional y quien manifiesta un comportamiento celoso al expresar en la denuncia «pero sí tiene tiempo para su novia».*

El lugar que los precedentes ocupan en el orden jurisdiccional nasa plantea consideraciones importantes. Está definido el horizonte de bienestar armónicamente deseable, que proporciona los elementos a proteger frente a cualquier desviación; también, se encuentra determinada la manera

como se han arreglado estos asuntos previamente. En la mente de cada comunitario han sido socializadas líneas de predictibilidad que permiten confiar en que cada vez que se transgrede una norma jurídica, se podrá garantizar una igualdad en el trato según ésta defina para tales situaciones, ya que se busca preservar los valores inherentes a la experiencia judicial que antecede al momento del caso.

> *Según me informan las autoridades en la reunión del 7 de noviembre de 2019, a Feliciano Valencia Medina se le trató como transgresor, producto de un «calentamiento o enfriamiento», expresó en la forma (ira) que lo que lo condujo a actuar de forma contraria a lo esperado.*
> *Fue sometido al debido proceso nasa y al ritual /Ki snxi/ de armonización con agua fría y fuete, ritos de sanación*

Según la sentencia: T523/97 de Carlos Gaviria Díaz que falló con un peritaje de esta autora dice:

Como bien lo afirma la antropóloga Esther Sánchez, la cultura paez, debe ser estudiada como parte de un "tejido históricamente configurado". No obstante haber sido sometidos a los procesos de dominación y aculturación, la lucha de varios de sus miembros por mantener la unidad y la preservación de su cosmovisión evitó que la asimilación de realidades externas borrara su identidad cultural. En especial, cabe destacar el papel de los mayores, que conservan en la memoria las tradiciones de sus antepasados y la aceptación de su palabra por parte de las nuevas generaciones, que superaron la prohibición del uso de su lengua y la imposición de una educación típica de la tradición de los blancos.

> *Una vez recibido el expediente los Ne'jwesx, bajo la orientación de los thë' wala se emprendió el ejercicio de la acción jurisdiccional bajo el principio de la buena fe, al saber que el Tribunal del Distrito Judicial de Popayán le otorgó su competencia. La acción jurisdiccional consistió en la valoración del expediente por las autoridades espirituales, luego la aceptación por parte de la máxima asamblea de comuneros. Una vez se surtió este proceso interno, las autoridades, los/ ne'jwesx/ y la asamblea trazaron una ruta espiritual (cateo, limpieza del cuerpo y su armonización) para determinar si existía rompimiento espiritual en la persona del comunero acusado y de esta manera poder remediarlo y devolverle la armonía a su cuerpo territorial y cuerpo colectivo; El proceso de cateo se hizo en el/ Ipx Kath Kwet/ (tulpa), 27 de septiembre de 2018. La limpieza espiritual se con conllevar en un sitio sagrado dentro del territorio y el refrescamiento y posterior armonización se hizo dentro de una laguna- el 30 de septiembre de 2018.*
>
> *Una vez surtido cada uno de los pasos establecidos en la ruta espiritual, el día 8 de octubre de 2018, la máxima autoridad es decir la comunidad remedio con fuete al señor FELICIANO VALENCIA MEDINA, por generar desarmonía en la comunidad y para que en adelante tuviera sabiduría para resolver los inconvenientes en su familia- /Ne'jwesx/ preventivamente.*

Este proceso fue posible, entonces, porque los nasa, además de gozar de unos elementos culturales característicos, se ven como parte de una comunidad diferente, que debe ser conservada como tal, es decir que en años exista como pueblo, pese a incorporar elementos diferentes de otras sociedades. Esa conciencia que los miembros tienen de su especificidad ha sido el motor que los ha impulsado a recuperar sus instituciones sociales, políticas y jurídicas que, no obstante haber sido influenciadas por la sociedad mayoritaria, no han dejado de ser auténticas. Un ejemplo de ello es su ordenamiento jurídico, claramente impregnado por símbolos y procedimientos propios que, para el caso que ocupa

a la Corte, merecen ser estudiados. En efecto, para los nasa no hay nada que la comunidad no sepa. Su procedimiento se origina en el */yacska te eindate teng /.*

Definir quién debe actuar de manera directa en los casos, hace parte de un complejo sistema establecido al interior con posibilidades de ser flexible. Además del gobernador y miembros del cabildo, también está la representada la comunidad. El conocimiento de los hechos, en este caso, su análisis de fondo permitió ejercer el derecho propio, en el ámbito de la justicia y por ende reforzar tanto la autonomía del pueblo como ampliar la conciencia de todos, logrando que se reconozcan los deberes del sujeto nasa.

> *Feliciano Valencia es citado por las autoridades y comunitariamente se recibe el informe de las investigaciones. Definen las autoridades que Feliciano Valencia ofendió a la comunidad pues expresó un mal proceder ya que no manejó las circunstancias adecuadamente, acorde con las enseñanzas de los mayores.*
>
> *A Feliciano Valencia, se le dieron consejos y se definieron remedios para su sanación.*
>
> *Feliciano Valencia aceptó las manifestaciones contrarias a lo esperado por su comunidad.*
>
> *Tanto, autoridades del Cabildo, como el mismo Feliciano Valencia actuaron de acuerdo con su Derecho Propio enmarcado en su cultura.*

Acorde con sus creencias, (mundo real en términos de Kripke), la aplicación del remedio será la única que podrá restaurar este equilibrio roto. Al ser aplicada públicamente, cumple una labor ejemplarizante y preventiva, que busca disuadir a los demás miembros de la comunidad de cometer faltas en el futuro y, al acusado, de reincidir.

«El fuete (…) consiste en la flagelación corporal con un "perrero de arriar ganado"; aun tratándose de una práctica heredada de los españoles, tiene un significado propio, el del rayo, que es pensado por los paeces como mediador entre lo claro y lo oscuro, es decir, como un elemento purificador».

> *Feliciano Valencia Medina fue sometido al baño con agua fría; fue «tocado por el rayo» para pasar de un estado de oscuridad a uno de claridad, según sus creencias, las que son verdaderas puesto que existen en ese mundo cultural nasa, tanto, como puede ser la creencia católica que permite pasar de un estado de pecado a uno de gracia, mediante el ritual de la confesión.*
>
> *El interés superior del niño es un principio que los nasa han puesto de presente y por ello le dan a Feliciano Valencia consejo para no dejarse tentar por la madre del niño y darle al niño el trato que merece.*

IV. Observaciones a las decisiones de las autoridades indígenas

La Corte Constitucional ha indicado que no se «puede ir más allá de lo que es necesario para asegurar la previsibilidad de las actuaciones de las autoridades» y:

> […] para determinar lo previsible deberá consultarse la especificidad de la organización social y política de la comunidad de que se trate, así como los caracteres de su ordenamiento jurídico.

> Deben evitarse, no obstante, dos conclusiones erradas en torno a esta formulación. Por una parte, el reducir el principio de legalidad a una exigencia de previsibilidad no implica abrir el paso a la arbitrariedad absoluta, ya que las autoridades están obligadas necesariamente a actuar conforme lo han hecho en el pasado, con fundamento en las tradiciones que sirven de sustento a la cohesión social. Por otra parte, no puede extenderse este requerimiento hasta volver completamente estáticas las normas tradicionales, en tanto que toda cultura es esencialmente dinámica, así el peso de la tradición sea muy fuerte.

El territorio y la pertenencia étnica de las partes en la delimitación de la *notio*

Si bien la facultad de administrar justicia es un derecho de grupo de los pueblos indígenas y este derecho implica que la jurisdicción en cada caso responde a la especificidad cultural de cada pueblo, también es cierto que se trata de un derecho limitado. El primero de estos límites tiene que ver con los asuntos que pueden conocer las autoridades indígenas. Al revisar el texto constitucional, se constata a este respecto que no hay una limitación en cuanto a la materia o la cuantía. El límite al que se refiere la norma es el del territorio: «las autoridades judiciales de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial». Pero ¿qué quiere decir que, los fallos de las autoridades indígenas sólo tienen efectos en su territorio o que las autoridades indígenas sólo pueden conocer, juzgar y sancionar hechos ocurridos dentro de su territorio? Y ¿cuál es el territorio al que se refiere exactamente la Constitución: ¿es el del resguardo o el que tradicionalmente ocupa la comunidad indígena considerado como su territorio de usos y costumbres?

La jurisprudencia de la Corte Constitucional provee herramientas valiosas para dilucidar las preguntas que se han formulado. Frente al primer interrogante, la posición de la Corte ha sido que la restricción territorial se refiere al lugar de ocurrencia de los hechos que generaron el conflicto. Por un lado, ésta es la interpretación que expresamente se ha dado a la norma. En la ST-496 de 1996, al referirse a los elementos que configuran el fuero indígena, se afirma que uno de los elementos de este fuero es «(...) de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio (...)». La Corte ha tendido a favorecer una definición amplia de territorio, en lugar de identificar el territorio, al que se refiere la Constitución, con el constituido legalmente como resguardo.

> *No existe la palabra resguardo como ámbito territorial en lengua nasa. Ha sido traducido por los nasa como: /usu ytxnxi/. La palabra /Kyuupnxi/ se define como encierro, /Txteepa/ /Mteepa/ o «hasta cierta parte». Esta idea se contrapone a la visión radial nasa: /Kiwe cwy spaxnxi/ qué significa «todo lo que alcanzo a ver con el pensamiento» y «lo que tengo en mi mente».*

La Corte en la sentencia T-384 de 1994, comprende esta visión diferenciada de territorio. En la sentencia se cita el artículo del Decreto 2001 de 1988 donde se define como territorio indígena: «...aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales». Además, se cita el artículo 124 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), según el cual: «... se entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellos que, aunque no poseídos en esa forma, constituyan ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales». Usando estas definiciones, la Corte determina el sentido de la frase «territorio indígena» contenida en el Art. 10 de la Constitución Política, similar a la que está en el artículo 246 de la Carta. Concluye la sentencia estableciendo que en el departamento del Guainía tiene como lengua oficial el curripaco, además del

castellano, «(...) porque los resguardos indígenas de los que participan los miembros de esa etnia cubren el 90 % de los 72.238 km^2 del territorio departamental (...)».

> *Puede afirmarse que culturalmente los nasa conocen historias de sus antepasados que lucharon en Popayán para no ser eliminados física y culturalmente.*
>
> *Popayán para los indígenas del Cauca es ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales, no solo porque, efectivamente, allí estuvieron sus antepasados, sino que es lugar para el desarrollo de múltiples actividades hoy, que les impide conocer que ese no sea su territorio.*

La historia política del pueblo nasa contada por Víctor Daniel Bonilla entre muchas otras existentes, hace referencia a la importancia de conservar sus territorios y dentro de estos la ciudad de Popayán es pensada como parte de su territorio. Un indígena como Feliciano Valencia, que lucha por el reconocimiento de sus tierras y de su cultura, no puede pensar que Popayán, donde vivieron sus amores, no sea «ámbito territorial».

> *Dándose perfecta cuenta de la importancia que para el presente y el futuro de su pueblo tenía la conservación de sus territorios, se unió a su compadre y vecino de Tacueyó, el cacique Quilo y Sicos, en la tarea de conseguir el reconocimiento y la delimitación de los territorios nasas. Viajó a Quito con su compadre y bregó hasta lograr que se les otorgaran los títulos que su antecesor, el cacique Jacinto Muscuy, había solicitado desde cuatro años atrás. Al regresar a Popayán los hicieron copiar y registrar ante las autoridades coloniales y luego, en compañía de su vecino y autoridades de Popayán, delimitó y entregó a cada parcialidad lo suyo, como puede verse en los títulos de resguardo que aún conservan las parcialidades. Consiguiendo esto, Juan Tama procedió a enseñarles la manera como deberían enfrentar a quienes invadieran sus territorios. Sobre este punto escribió en 1702: «Se opondrán fuertemente y en todo caso despojaron tomando su terreno como propietarios que son».*

La conciencia étnica como factor que determina la jurisdicción

De acuerdo con la sentencia T-496 de 1996, para determinar los casos que pueden ser conocidos por la jurisdicción indígena el factor territorial no es suficiente. Debe tenerse en cuenta el grupo étnico al que pertenecen las partes involucradas. El factor territorial solamente es suficiente cuando las partes involucradas pertenecen todas al mismo grupo étnico. Pero, cuando en un asunto de cualquier tipo las partes pertenecen a diferentes grupos étnicos, este hecho debe ser tenido en consideración.

Frente al caso:

> *Feliciano Valencia es nasa, su hijo también es nasa ya que en el marco de su organización social el parentesco se da, tradicionalmente, por línea paterna. La madre del niño manifiesta no ser indígena. Para el derecho propio los actores del caso son el Padre y el hijo, ambos nasa.*

En resumen, la Corte Constitucional en su interpretación de las normas constitucionales relacionadas con los pueblos indígenas, ha establecido que existen dos factores que determinan los asuntos de los que pueden conocer las autoridades de los pueblos indígenas en calidad de administradoras de justicia: 1. El territorial; y, 2. El subjetivo.

Popayán como lugar donde sucedieron los hechos es para las autoridades indígenas y los comunitarios, territorio de su jurisdicción; pueden conocer de los asuntos que suceden en Popayán, porque tradicionalmente han sido ocupados por las comunidades nasa.
El factor personal se refiere a la necesidad de atender las diferencias culturales que se tienen con la demandante.

V. Valoración de las decisiones de las autoridades

Seguir tejiendo armonía entre las jurisdicciones

Vale realizar las siguientes preguntas: ¿Con qué garantías cuentan las autoridades de los nasa del resguardo para el ejercicio de su derecho a administrar justicia?

¿Existe validez y eficacia legal de las decisiones que resuelven conflictos, sin que tengan que ser juzgados nuevamente en el sistema nacional?

En razón a qué el derecho a administrar justicia que se concede a los pueblos indígenas tiene tanto un aspecto orgánico como carácter de derecho fundamental, los nasa bajo la legislación saben que se les debe garantizar el ejercicio de su derecho a través de la promoción de un conflicto positivo de competencias ante la autoridad competente, porque dos autoridades judiciales reclaman tener atribuciones para conocer de un mismo caso.

En virtud del auto con fecha 19 de marzo de 2019, correspondiente a un incidente de desacato por la presunta omisión de cumplimiento del auto de tutela incoada por la Señora Diana Perafán Hurtado en representación de su hijo y, en contra del tribunal de Popayán y el Cabildo Indígena Munchique Los Tigre y como autoridad que represento de manera temporal ante las instituciones gubernamentales y no gubernamentales los interés colectivos de la comunidad y en mandato al derecho mayor y ley de origen desde nuestros principios culturales y cosmogónicos, me permito dar respuesta en los siguientes términos: el representante de la comunidad (ne'jwesx) centros poblados de Popayán, Cali o Santander de Quilichao; las decisiones que afecten la colectividad del territorio indígena nasa deben ser consultadas con el acompañamiento de los Thë' Wala, los Ne'jwesx y la nasa Wala (máxima autoridad), esta última siendo la llama a tomar decisiones definitivas; y adjunto a ello, nuestras actuaciones están regidas por el calendario nasa, asunto que conjuga una diversidad de aspectos dentro del tiempo y espacio bajo la orientación de nuestras autoridades espirituales.

(…) el proceso que fue remitido al cabildo de parte del Tribunal Superior de Popayán quedó remediado y cerrado espiritual y materialmente; revivir lo actuado por los Kiwe the, los Ne'jwesx y la nasa Wala constituiría una desobediencia a las leyes del derecho mayor y la ley de origen, haciendo que la paz recaiga sobre el comunero, y si lo interpretamos del derecho positivo se estaría rompiendo con los principios y el derecho fundamental de la cosa juzga.

(…) nuestra jurisdicción ejerce el principio de la oralidad, esto significa que todo el ejercicio de diálogo, debate, conversación y comunicación se teje desde nuestra lengua materna (nasa yuwe); sumado a esta, por orientación y principio cultural no se establece registros a modo de expediente, todo el proceso se surte alrededor de nuestro ïsxi ipx kat kwe espacio espiritual de máximo respeto que concurren niños, adultos, abuelos, kiwe the' y los Ne'jwesx.

Por las razones dadas en el numeral anterior y, por la imperiosidad de los términos de tiempo solo se dispuso a dar un informe bajo la orientación de los kiwe thë'.

Como autoridades ancestrales nos enmarcamos bajo los principios del derecho consuetudinario, razón por el cual, invitamos a los honorables magistrados, hacer esfuerzos máximos en la interpretación de las actuaciones de nuestra jurisdicción y si es el caso, nuestro espacio territorial está presta para recibirlos y que puedan escuchar y vivenciar de primera persona el ejercicio de la Jurisdicción especial Indígena del pueblo nasa del Resguardo Munchique los Tigres. (Cursiva fuera de texto).

A manera de conclusiones

En mi concepto:

1. Las autoridades tradicionales con competencia jurisdiccional conocieron oficial y legalmente el caso de Feliciano Valencia, acorde con sus usos y costumbres.
2. Aplicaron el debido proceso y sancionaron.
3. Tanto en el derecho nasa como en el estatal los niños tienen una valoración especial y deben ser protegidos.
4. De manera interlegal el derecho nasa y el derecho positivo estatal no pueden juzgar y sancionar dos veces a un sujeto.
5. Despreciar el derecho fundamental de aplicar justicia por parte de las autoridades del resguardo y en el marco de su derecho propio, contraviene la constitución. Los efectos no recaen solamente sobre el senador Feliciano Valencia sino sobre el sujeto colectivo de derecho, sujeto de especial protección, ya que vulnera la autonomía y los modos de aplicar justicia, eliminando la posibilidad de exaltar esas determinaciones autónomas como de igual valor y en cumplimento de mandatos constitucionales.

Manifiesto que este concepto lo he realizado de buena fe. Puede ser sustentado.

Esther Sánchez Botero

Anexo 1

HOJA DE VIDA

Esther Sánchez de Guzmán, con C. C. 41 428 400, es antropóloga de la Universidad de los Andes y PhD de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam. Desde 1976 ha venido realizando un trabajo de investigación-acción, bajo el marco del Programa Construcción de Entendimiento Intercultural el cual ha implicado como profesional independiente: *a)* Actuaciones como perito en la Corte Constitucional de Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas y jueces penales, agrarios y de familia; *b)* Construcción de políticas públicas de indígenas, gitanos y afros en los Ministerios del Interior, Justicia, ICBF y Procuraduría delegada de Etnias. *c)* Consultoría y asesoría a empresas que afrontan conflictos culturales y normativos judicializados; *d)* Consultora evaluadora internacional de conflictos interculturales en Ecuador y Argentina.

Ha publicado doce libros de Antropología Jurídica financiados por la Procuraduría General de la Nación, ICBF, UNICEF, Universidades Nacional, Andes, Ámsterdam, Cooperación Alemana, Naciones Unidas y numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Profesional experta de la OIT (1992) para la difusión del Convenio 169 de la OIT y del derecho a la consulta. Docente universitaria e investigadora: Universidades de los Andes, Nacional, Rosario, Cauca y Católica de Perú y Chile. Andina y Flaxo Ecuador.

Anexo 2

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Cuáles son las razones antropológicas para considerar a una persona indígena?
2. ¿La descendencia indígena que implicaciones tiene el fuero indígena, pero especialmente en el pueblo nasa?
3. ¿El fuero indígena de un comunero, se pierde cuando la presunta víctima no es indígena?
4. ¿Cuál es el significado en la cosmovisión de los pueblos indígena nasa (Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres) de la familia indígena?
5. ¿Qué significado tiene y en qué momento se aplica el remedio preventivo dentro de la Jurisdicción Especial Indígena (Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres)?
6. ¿Qué efectos jurídicos tiene el remedio aplicado por la Jurisdicción Especial Indígena y en concreto por la justicia propia del pueblo nasa?
7. ¿Cuáles son las reglas para resolver conflictos por violencia intrafamiliar y qué impacto tiene en la comunidad nasa esta conducta desequilibrante?
8. ¿Cuáles son los remedios (sanción) que aplica la Jurisdicción Especial Indígena del pueblo nasa para los comuneros que cometen conductas en contra de la familia, asimilables a la «violencia intrafamiliar»?
9. ¿Quién ejerce la función de acusación y juzgamiento en el Cabildo/Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres?
10. ¿Cómo se ejerce y a través de quien la defensa de los acusados indígenas en la Jurisdicción Especial Indígena del pueblo nasa-Cabildo/Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres?
11. El Cabildo/Resguardo Indígena de Munchique Los Tigres tiene un reglamento interno que establezca las conductas desequilibrantes (delitos) y sus remedios?
12. ¿Cuáles son las garantías de las víctimas y su grupo familiar, cuando se presenta una conducta de violencia contra la familia, por parte de otro miembro de la comunidad nasa?
13. ¿Cuáles son las medidas de protección que tiene establecidas la comunidad cuando un menor es víctima de la conducta de otro comunero del resguardo, miembro de su mismo grupo familiar, y cómo están garantizadas esas medidas de protección a las víctimas?
14. En caso de la reiterada incursión en una conducta por parte de un miembro de su Comunidad, ¿cuál es el procedimiento para seguir y si tal comportamiento está previsto en el reglamento como una situación de agravación?
15. ¿Cuáles serían las sanciones para quien comete una conducta de violencia contra la familia? En caso de que se imponga alguna sanción al infractor, ¿quién la ejecuta y en qué lugar se cumple?
16. ¿Cuáles serían las sanciones para quien comete una conducta que transgrede los derechos de los niños indígenas? En caso de que se imponga alguna sanción al infractor, ¿cuáles son las medidas coercitivas para que la sanción se cumpla?
17. ¿El fuera indígena de un comunero, se pierde cuando la presunta víctima no es indígena?
18. ¿Qué significado tiene la Jurisdicción Especial Indígena para las pervivencias de los pueblos indígenas en Colombia?
19. ¿Cuáles son las características generales del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena de los diferentes pueblos indígenas?

Anexo 3

MEMORIA FOTOGRÁFICA



Bibliografía

Bonilla, Víctor Daniel. *Historia política de los paeces*. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/359181252/Victor-Daniel-Bonilla-Historia-Politica-de-Los-Paeces>.

HOEKEMA, André. *Imágenes de Autonomía*. Ámsterdam: Universidad de Ámsterdam

Restrepo Saldarriaga, Esteban. (1997). *Jurisprudencia Indígena de la Corte Constitucional*. Bogotá.

Sánchez Botero, Esther. (1998). Justicia y Pueblos Indígenas de Colombia. Políticas de reconocimiento a la diversidad. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho. Unijus. Bogotá. Ed Universidad Nacional. Imprenta Unilibros.

Sánchez Botero, Esther. (1999). Protección a niños indígenas de Colombia. ICBF. Ed Impresores.

Sánchez Botero, Esther. (2000). «Justicia indígena». *Caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Universidad de los Andes.

Sánchez Botero, Esther. (2002). Política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural y de protección al menor. Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. ICBF Bogotá: Quebecor Editores. 2002. Tomo III.

Sánchez Botero, Esther. ¿La cultura como clonación? Identidades e identificaciones. Programa Construcción de entendimiento intercultural. ICBF. Bogotá: Quebecor Editores. 2002. Tomo II,

Sánchez Botero, Esther. (1996). *Semilleros temáticos para la construcción de entendimiento intercultural*. Bogotá: ICBF.

Sánchez, Esther y Jaramillo, Isabel Cristina. (2000). *La Jurisdicción Especial Indígena.* Bogotá: Procuraduría General de la Nación.

Sentencias

ST-188/93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
ST–342/94. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
SU- 039/97. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
ST-380/93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
SC/95. M. P. Hernando Herrera Vergara.
ST-496/96. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
ST-523/97. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
SC-05894. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
SC-139/96. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
ST-349/96. M. P. Carlos Gaviria Díaz.